

Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos

Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos

ISSN: 1887-4460

nº2 mayo-agosto de 2007

PODER Y ESTADO RENTISTA EN EL MUNDO ÁRABE

Ferran Izquierdo Brichs

Profesor de Relaciones Internacionales (Universitat Autònoma de Barcelona)



La conflictividad en el norte de África y en Oriente Medio, en esta área que normalmente llamamos mundo árabe, ha estado asociada en muchas ocasiones al petróleo. Como veremos, la conflictividad no está tan ligada a la carestía como al posible uso del recurso en la competición por la acumulación de poder. Por esta razón, para comprender el papel que juegan los recursos en una sociedad, es necesario analizarlos desde la perspectiva de la sociología del poder más que desde una perspectiva puramente económica.

Nuestro punto de partida analítico, desde la sociología del poder, es que las relaciones sociales, económicas y, evidentemente, políticas, cuando se establecen organizaciones jerarquizadas, son competitivas y continuas y se convierten siempre en relaciones de poder y por el poder, a las que llamaremos relaciones circulares pues nunca terminan y se alimentan a sí mismas. El objetivo prioritario de las elites que controlan las jerarquías es la acumulación diferencial de poder, de más poder que los otros individuos de la elite, por lo que este tipo de relaciones son circulares, sin fin.

En consecuencia, el poder será el factor analítico fundamental en cualquier relación social, económica y política en un sistema jerarquizado en el que se crean elites. La competición es una sola y única: la del poder, en la cual los actores se enfrentan utilizando diversos recursos, en función de sus capacidades, en distintos procesos de acumulación de poder. Por esta razón, el análisis no se puede hacer de forma diferenciada para cada uno de estos ámbitos ya que, si la competición es siempre por el poder, los actores implicados en la competición juegan todos contra todos en un solo y único juego. También es necesario tener en cuenta que el poder no es una abstracción, por lo que los actores implicados en una relación de poder no pueden ser abstractos como la Nación, la Empresa o el Estado, sino individuos o grupos sociales entendidos como un conjunto de individuos.

En contraste con las relaciones circulares de poder vemos que existen otro tipo de relaciones que se establecen para conseguir objetivos concretos, más allá de la acumulación de poder. Los

Notas

- (1) Sobre esta cuestión ver: MAÑÉ, Aurèlia; CAMARA, Carmen (de la), "Rusia: ¿hacia una economía petrolero-rentista?", *Revista de Economía Crítica*, nº 3 (enero 2005).
- (2) BEBLAWI, Hazem y LUCIANI, Giacomo (eds.), *The Rentier State*, Londres, Croom Helm (1987), pp. 18, 52, 59-60.
- (3) Un ejemplo de análisis desde la sociología del poder se puede encontrar en ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio y IZQUIERDO BRICHS, Ferran, *¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí*, Madrid, La Catarata, 2007.
- (4) Sobre la autonomía del Estado en el debate marxista ver: MILIBAND, Ralph, "State Power and Class Interests", *New Left Review* 138, March/April 1983; MILIBAND, Ralph, "Poulantzas and the Capitalist State", *New Left Review* 82, November-December 1973.
- (5) CLERC, Denis, "Stratégies Pétrolières, Etats Producteurs et Compagnies", *Peuples méditerranéens*, 58-59 (janvier-juin 1992), p. 63.
- (6) VIEILLE, Paul, "Le pétrole comme rapport social", *Peuples méditerranéens*, 26 (janvier-mars 1984), p. 17.
- (7) GALTUNG, Johan, "A Structural Theory of Imperialism", *Journal of Peace Research*, 2 (1971).
- (8) VIEILLE, Paul, "Pétrole et classe fonctionnelle. Le cas de l'Arabie Saoudite", *Peuples Méditerranéens*, 1 (Octobre-Décembre 1977).
- (9) Los fenómenos descritos en los países productores de petróleo se pueden ver, en

procesos de cambio no son provocados por la competición por el poder, sino por la lucha por mejores condiciones de vida. En consecuencia, los procesos de cambio sólo se producen cuando uno de los actores establece relaciones de poder lineales, no continuas. Estas relaciones son lineales porque tienen un principio y un fin: cuando se ha conseguido el objetivo concreto la relación termina. Al contrario, las relaciones circulares establecidas por los actores que disputan la acumulación diferencial de poder no tienen fin y son básicamente conservadoras.

La población normalmente es un recurso en manos de la competición de las elites, sin embargo, cuando es capaz de coordinarse para conseguir un objetivo concreto se convierte en actor en una relación lineal. Los procesos revolucionarios sólo pueden llegar de la masa como actor político, no como recurso de poder, cuando lucha por intereses y objetivos concretos en una relación lineal.

Así, es necesario identificar cuando una relación de poder es lineal o circular. Dicho de otra forma, es necesario identificar cuando los actores en una relación de poder tienen objetivos e intereses concretos y cuando los actores tienen como objetivo prioritario la acumulación diferencial de poder. En el primer caso, la relación lineal, la mayoría de la población puede establecer alianzas con otros actores si los objetivos e intereses son coincidentes o complementarios o incluso puede ser ella misma un actor político revolucionario. En el segundo caso, la relación circular, la mayoría de la población debe tener claro que el objetivo principal de los actores no es coincidente con los suyos propios y que las decisiones que toman los actores tienen como prioridad la acumulación diferencial de poder. En este segundo caso, la relación que establecen las elites con la mayoría de la población es de sujeto a objeto, de actor a recurso, y la posición de la mayoría de la población es de subyugación al interés de las elites en términos de acumulación de poder. El tiempo largo, las condiciones en que se desarrollarán las relaciones sociales, lo marcan las relaciones lineales transformadoras en los momentos revolucionarios, pero son las relaciones circulares las que ocupan la mayor parte del tiempo y dominan los grandes períodos de estancamiento.

Debemos pues analizar el papel que juegan los recursos en estas relaciones de poder, que son las que dominan las sociedades árabes desde los procesos de descolonización.

El petróleo es un recurso estratégico que sitúa a quienes tienen capacidad de utilizarlo entre los sectores con más poder del mundo. Así, los dirigentes de las grandes corporaciones petrolíferas tienen en sus manos uno de los principales recursos en términos de acumulación. Por otra parte, en los países productores, el control de las rentas del petróleo también se ha convertido en uno de los principales instrumentos de acumulación de poder en manos de las elites que dirigen los

menor grado, en otros estados rentistas. Así, por ejemplo, los estados del frente con Israel, durante mucho tiempo también recibieron parte de la renta del petróleo desde los países productores que donaban su ayuda como una muestra de solidaridad y para aplacar tensiones con sus propias opiniones públicas y con el exterior árabe. Actualmente, tanto Egipto como Jordania reciben grandes volúmenes de ayuda norteamericana. Los regímenes de los estados receptores, utilizaron y continúan utilizando ésta y otras ayudas en el mismo sentido que estamos describiendo para los estados exportadores de petróleo.

(10) VIEILLE, 1984, *op.cit.* , pp. 30-31.

(11) CLERC, *op.cit.*

(12) MARTÍN MUÑOZ, Gema, *El Estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista* , Barcelona, Bellaterra, 1999, p. 19.

(13) *El País* , “La argelina Sonatrach toma el 2% de la eléctrica portuguesa EDP”, 3 de abril de 2007, p. 68.

(14) EFTEKHARI, Nirou, « Rente et dépendance en Algérie », *Peuples méditerranéens* , 26 (janvier-mars 1984), pp. 36-37.

(15) MAÑÉ, Aurèlia, “El fin del pacto social. Hidrocarburos y legitimación política”, *Nación Árabe* , 46 (invierno 2002), p. 101, 103.

(16) Sobre las políticas agrarias de la revolución ver : EFTEKHARI, N. *op.cit.* , pp. 45-51.

(17) AYUBI , Nazih N. *Política y sociedad en Oriente Medio. La hipertrofia del estado árabe* , Barcelona, Bellaterra, 2000 , pp. 484-487.

(18) AYUBI, *op.cit.* , pp. 496-498.

(19) MARTÍN, Iván, “ Argelia: aproximación económica a la crisis”, *Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Documentos de Trabajo* , nº DT: 5/1998, pp. 27-28 < <http://129.3.20.41/eps/dev>

regímenes. Por esta razón, la conflictividad alrededor del petróleo ha ido creciendo a medida que crecía su importancia, tanto en el ámbito global como en el ámbito de cada uno de estos países.

El petróleo se ha convertido en un factor básico en los procesos de producción, distribución y consumo en las sociedades capitalistas, y por tanto en uno de los recursos clave en los procesos de acumulación de capital/poder. No es necesario insistir en la omnipresencia del petróleo en las sociedades modernas industrializadas, que lo convierte en un recurso fundamental y seguirá siéndolo en un futuro lejano dado que su sustitución es costosa y difícil al abarcar tantos ámbitos. Sólo un cambio de modelo, del productivismo capitalista al objetivo del bienestar suficiente y sostenible podría restar importancia al petróleo como recurso, y por ahora esto parece estar más cerca de la utopía que de la realidad.

El control del petróleo, además, tiende al oligopolio por sus características tanto de producción como de transformación, con lo que las elites que pueden utilizarlo como recurso de poder son muy reducidas, al tiempo que con gran influencia tanto en las sociedades domésticas como en la global. La localización del petróleo en regiones muy concretas del mundo y las economías de escala a causa de ser un sector muy intensivo tanto en tecnología como en capital/influencia política convierten a los pocos países que lo producen y a las pocas corporaciones que lo controlan en actores con una posición estratégica en la competición por la acumulación de poder. O, dicho más correctamente, sitúan a las elites que gobiernan estos países y estas corporaciones entre las más poderosas del mundo.

Del mismo modo, el petróleo se ha convertido también en uno de los recursos fundamentales en el proceso de legitimación de las elites en el poder en los países productores. La distribución de las rentas generadas por el petróleo ha sido durante mucho tiempo el principal mecanismo político de consolidación del poder. Sin embargo, esto a su vez tiene el peligro de estar a expensas de la volatilidad en los precios del petróleo, de la posición dominante de las corporaciones en el mercado y de que si otra elite consigue hacerse con el control del petróleo la expulsión de la primera de la competición por el poder es casi total.

El poder de las elites de los países productores no se limita al ámbito doméstico. Las enormes rentas generadas a partir de los años setenta y de la nacionalización de los recursos han transformado completamente estas sociedades y durante un tiempo situó estos países en el mapa de las potencias regionales. La coordinación en el marco OPEP les dio una influencia sobre la economía global inimaginable para cualquier otro país del Sur. Y las enormes compras de armamento a causa de la militarización de la política de Oriente Medio provocada por la creación de Israel hicieron creer que eran potencias hasta que el

/papers/0405/0405001.pdf>

(20) Ver MAÑÉ ESTRADA, Aurèlia, "Argelia: ¿retorno al nacionalismo energético?", *Análisis del Real Instituto Elcano*, n° 36, octubre de 2006, pp. 21-27.

(21) *Ibid.*, p. 26. Sobre la recuperación de la presencia estatal en el control del petróleo y el gas ver también: SÉRÉNI, Jean-Pierre, "Les États s'emparent de l'arme pétrolière", *Le Monde Diplomatique*, Mars 2007, pp. 1, 18-19.

(22) *El País*, "La creación de una OPEP del gas gana terreno ante la cita de Doha", 20 de marzo de 2007, p.14.

(23) ERDLÉ, Stefan, *Ben Ali's 'New Tunisia': A Case Study of Authoritarian Transformation*, Ph. D. Thesis, Humboldt University of Berlin, October 2006, p. 45.

(24) Según el concepto de Mañé y Cámara, *op. cit.*

(25) VIEILLE, 1977, *op.cit.*, pp. 159, 166-167.

(26) LONGUENESSE, Elisabeth, « Structure de classe dans le Golfe », *Peuples méditerranéens*, 26 (janvier-mars 1984), p. 40.

(27) VIEILLE, 1977, *op.cit.*, p. 180.

(28) LONGUENESSE, *op.cit.*, pp. 41-43.

(29) BEBLAWI, y LUCIANI, (eds.), *op.cit.*, p. 56.

(30) Sobre esta doble dinámica ver: NITZAN, J. y BICHLER, S. *The Global Political Economy of Israel*, Londres, Pluto Press, 2002, pp. 198-273.

(31) COOLEY, Alexander A. "Booms and Busts: Theorizing Institutional Formation and Change in Oil States", *Review of International Political Economy*, 8:1 (Spring 2001), p. 166.

(32) EHTESHAMI, Anoushiravan, "Reform from above: the politics of participation in the oil monarchies", *International Affairs*, 79, 1 (2003), p.68.

enorme poder militar israelí y norteamericano lo desmintió.

Como es evidente, aunque nosotros centremos la atención principalmente en las sociedades árabes, la importancia del petróleo en los procesos de acumulación de poder lo convierten en uno de los mayores imanes de la conflictividad que abarca mucho más allá del mundo árabe. En la conflictividad por el petróleo se ven envueltos todos los actores con una posición dominante en la competición por el poder: las elites que controlan los países productores; las elites que controlan las corporaciones, a las que se añaden las de los sectores que se ven directamente afectados por la generación de rentas del petróleo como los productores de armamento; las elites que sienten como una amenaza las alzas de precios del petróleo como las del resto de sectores económicos o como las elites que controlan las sociedades consumidoras; y, está claro, también las elites financieras por el peso que tienen las rentas del petróleo en los movimientos internacionales de capital.

Las elites dirigentes de los países productores están ligadas directamente a las elites del núcleo del sistema internacional. De hecho, la economía de los países exportadores depende de sus lazos exteriores, tanto en el sector del petróleo como en la inevitable omnipresencia de las importaciones. La parte de la renta del petróleo que se distribuye se termina convirtiendo en poder de compra y generando un volumen de demanda que la producción interior no es capaz de satisfacer. La debilidad de la industria doméstica obliga a potenciar las importaciones o, como máximo, a implantar algunas industrias de sustitución de importaciones que, de igual forma, dependen del exterior. La coincidencia de intereses entre las elites de las economías industrializadas y las elites de los países exportadores de petróleo conduce a que esta dependencia se transforme en realidad en una permanente devolución de los petrodólares al centro del sistema mundial. Así, la economía del petróleo permite alimentar dos procesos de enorme concentración del poder y del capital como un recurso de poder. Por una parte, la acumulación de poder en los países productores que estamos analizando en este capítulo. Por otra parte, la acumulación de poder en manos de las elites del centro.

A través del mecanismo del petróleo se produce una importante extracción de recursos de la población de los países industrializados, lo que se ve claramente en los momentos inflacionarios a consecuencia de las subidas del precio del petróleo, cuando la gran mayoría de la población paga más por el petróleo, sus derivados y todo lo que está ligado a su uso. Además, estas subidas del coste de la vida están generadas por un recurso cuyo precio depende directamente de los carteles de la demanda, y en menos ocasiones de los carteles de la oferta, todos ellos oligopolios. Y estos recursos extraídos de la población en forma de precios más altos se acaban concentrando en manos de las elites de las mismas sociedades industrializadas, o directamente o después de pasar por las

(33) MAÑÉ, Aurèlia: “Com afecta a l’Orient Mitjà l’organització del mercat del petroli”, en VICENÇ, Belén (coord.) *L’Orient Mitjà en el punt de mira*, Bellaterra, UAB (2005).

manos de las elites de los países productores. Esto ocurre, por ejemplo, vía corporaciones ligadas al petróleo, vía transferencias financieras desde las elites de los países productores a las instituciones financieras occidentales, vía compra de armamento, vía demanda de importaciones, o vía impuestos a través del estado. El resultado final es que el mal llamado “mercado” del petróleo, tiene poco de mercado y mucho de mecanismo de acumulación de poder y de capital en manos de unas elites muy reducidas que controlan el recurso Capital o el recurso Estado en la competición por la acumulación de poder.

Petróleo y regímenes rentistas

La construcción de la mayoría de estados árabes es una muestra de las tensiones entre las relaciones lineales y las relaciones circulares de poder, con consecuencias que perduran hasta la actualidad. Las independencias y la recuperación de la soberanía tanto política y territorial como sobre los recursos económicos fueron objetivos de la mayoría de la población ante el colonialismo. Cuando la población, la masa, se convierte en actor con conciencia de sus intereses reales es capaz de establecer una relación de poder lineal a la cual se deben supeditar las elites en su competición por la acumulación de poder. En el caso de los países productores de petróleo, esta reclamación de la soberanía se trasladó a la principal riqueza: el petróleo, y obligó a las elites que dirigieron las independencias y la soberanía recuperada a distribuir los beneficios que generaba.

La distribución de la renta del petróleo se convirtió en un mecanismo de legitimación para las elites, primero forzadas por la población convertida en sujeto capaz de luchar por sus intereses, más tarde como un recurso en la competición por la acumulación de poder.

El análisis de la economía política de los países productores de petróleo ha convergido en la conceptualización de las economías rentistas. Mañé y Cámara definen las economías petrolero-rentistas como “las de aquellos territorios en los que la gestión del sector de los hidrocarburos se lleva a cabo con el objetivo –político- de lograr el máximo posible de renta del subsuelo para los ciudadanos nacionales” (1). Según estas autoras se deben cumplir las siguientes condiciones: la economía de estos países se debe basar en la exportación de petróleo o de recursos naturales sin elaborar; la intervención pública del gobierno se basa en los ingresos obtenidos de la exportación y esto significa que las políticas presupuestarias son principalmente de gasto y tienen el objetivo de legitimar el régimen; esta dinámica conduce al desarrollo de una economía no productiva basada en la renta petrolífera que mantiene al sector servicios y al consumo sobre todo de productos importados; y así la consecuencia de todo ello es la dependencia directa de la economía respecto de los precios del petróleo. Y

también la estabilidad de las elites que controlan el régimen político y económico depende de las subidas y bajadas del precio del barril de petróleo en el mercado internacional.

El estado rentista procura un gran margen de autonomía a las elites que lo controlan pues la relación que establece con la población es la de distribuidor y no la de recaudador. Así, es la capacidad de control sobre el estado lo que determina el poder de los actores, pues son las instituciones estatales las que gestionan el petróleo y la renta que genera. La mayoría de estados árabes, tanto ricos en petróleo como pobres, han entrado en algún grado en el rentismo. Los estados que no tienen petróleo han aprovechado la importancia estratégica de cercanía a los pozos para conseguir rentas exteriores, tanto de los que los quieren como aliados como de los que están dispuestos a pagar para no verse amenazados. El petróleo, por su valor para la consolidación en el poder de las elites y por su localización, convierte a los estados y a las elites en vulnerables a la posibilidad de perder el control de la renta, por lo que están dispuestas a realizar generosas transferencias a aquellos que pueden sentir la tentación de apropiarse de los pozos. Por la misma razón, como el petróleo genera vulnerabilidad y amenazas pero también permite aumentar los presupuestos de defensa, los regímenes se militarizan y se convierten en unos de los más importantes clientes de las industrias de armamento (2).

Los regímenes consiguieron la soberanía sobre los recursos con la ayuda de la población que se movilizó por este objetivo. La reclamación de la independencia y de la soberanía permitió el acceso de algunas elites autóctonas al control del estado y, a partir de aquel momento, tuvieron en sus manos la principal riqueza del país. Esto no significó una democratización de la relación de la población con el petróleo, sin embargo, mientras la población mantuvo su capacidad de movilización o de amenaza, las elites tuvieron que compensarla por la concentración del poder en sus manos y por el control del petróleo. El sistema de compensación fue la distribución de parte de la renta generada por la exportación del crudo. Se invirtieron así las relaciones normales en un estado moderno, en el cual el gobierno extrae recursos de la población mediante impuestos para después administrarlos. En el caso de los estados rentistas, una vez se ha conseguido el dominio sobre el recurso que genera la renta, la relación con la ciudadanía ya no es de recaudación sino de distribución, lo que debilita la capacidad de negociación del pueblo y por tanto el poder de las elites es mayor y más autoritario.

El análisis desde la perspectiva de la sociología del poder nos ayuda a identificar los actores determinantes, sus objetivos y la función de los recursos que tienen a su alcance (3). Con frecuencia se presenta a los estados productores de petróleo como un fracaso porque no han conseguido el objetivo del desarrollo económico o porque no han sido capaces de consolidar la independencia respecto a las grandes

corporaciones occidentales. Críticas similares se hacen a otro tipo de estados rentistas, como son aquellos que dependen de las rentas ligadas a la ayuda exterior o a la deuda externa. Sin embargo, estas críticas se basan en dos presupuestos que son falsos: el primero es que un estado tiene objetivos propios y el segundo es que la prioridad de los gobiernos de estos estados es el desarrollo.

Es un error tratar a los estados como actores con capacidad de decisión. El estado se debe tratar como un recurso en términos de poder. Es uno de los recursos más importantes, aunque no el único, que es utilizado en la competición por la acumulación de poder. Las elites que tienen capacidad para acceder al control del estado estarán pues entre las más poderosas y harán lo posible por impedir que otras puedan arrebatarles el control del estado o de porciones de él. El objetivo prioritario de estas elites, como decíamos al inicio, es la acumulación de poder, por lo que debemos medir el éxito de las políticas que aplican en función de este objetivo. Y en este sentido, en general, no se puede hablar de fracaso, sino al contrario, de un gran éxito pues la concentración de poder en los países petroleros es en general mucho mayor que en otras sociedades.

También es importante no limitarnos a la óptica marxista, que define al estado como un recurso pero al servicio del capital pues identifica a éste como el principal recurso en términos de acumulación (4). La competición nuclear no es por la acumulación de capital, sino de poder, con lo que los distintos recursos que sirven a este fin sólo se pueden jerarquizar en cada coyuntura y según cada actor. En una coyuntura capitalista, el capital será el recurso determinante o uno de los más importantes en el proceso de acumulación, y los actores que lo controlen serán los más beneficiados, pero otras coyunturas pueden dar ventaja a los actores que controlen, por ejemplo, el estado, la ideología o la coacción. Precisamente la experiencia de los países árabes nos sirve para matizar la perspectiva marxista, pues en ellos podemos ver claramente que otros recursos pueden ser tanto o más determinantes que el capital en la competición por la acumulación de poder. Es más, se puede apreciar que en muchos casos los regímenes rentistas sacrifican la acumulación de capital en aras de los otros recursos. Esto se traduce en empresas nacionales deficitarias que no tienen la función de generar beneficios y acumular capital, sino de distribuir la renta exterior y consolidar el poder de las elites gobernantes.

Otra importante consecuencia es la *dutch disease*, la constatación de que ante una gran entrada de renta exterior, el consumo se dirige a productos de importación y la producción interior tanto industrial como agrícola se ve amenazada. La "OPEP disease" es todavía más grave pues se produce en sociedades no industrializadas con lo que el posible desarrollo se ve obstaculizado por la capacidad de importación de productos mejores y de menor coste que los que produciría la incipiente

industria nacional. Además, la dependencia de la exportación de petróleo dificulta la adopción de medidas proteccionistas.

Sin embargo, estas explicaciones de los economistas esconden que la razón principal de la *dutch disease* es que el objetivo de las políticas de los gobiernos no es el desarrollo económico, sino la acumulación de poder. La competición permanente de las elites por la acumulación de poder, cuando el recurso principal de poder es el estado, exige dar respuestas a las demandas de la población para desarmar la posible oposición y consolidar el control. Esto provoca que las políticas distributivas pasen por delante de las políticas de inversión, pues es más importante asegurar la estabilidad del estado que preparar las condiciones para una mayor acumulación de capital. Así, la renta exterior se dirige principalmente hacia el consumo. Como señala Clerc, la renta incentiva el consumo, incluido el militar, más que la inversión, y el alza de los salarios que acompaña la entrada de la renta exterior, independiente de la productividad, se convierte en un nuevo obstáculo para una producción que se debería basar en buena parte en la ventaja comparativa de los bajos costes salariales (5).

Estas elites dominantes no se pueden considerar como una burguesía, sino más bien como una aristocracia rentista, pues su posición en el proceso de acumulación de poder depende de su capacidad de control sobre la renta que genera la exportación de petróleo. A su vez, esta aristocracia rentista depende directamente de la burguesía internacional y del apoyo de las elites globales, pues son ellas las que tienen el control sobre la fuente de la renta, tradicionalmente sobre las actividades transformadoras del petróleo pero también sobre las actividades de extracción y transporte. Esto convierte a las elites que controlan los estados productores en eslabones de las relaciones de producción globales al servicio de la acumulación de las elites del centro del sistema mundial. Esta posición subordinada no implica un choque de intereses, al contrario, hay una importante coincidencia entre los intereses de las elites locales de los países productores y las elites globales, sobre todo en los países que no siguen políticas nacionalistas. Esta coincidencia de intereses permite que la relación entre las elites globales y de los países productores se establezca sobre la base de alianzas en las que las primeras utilizan a las elites locales para asegurar el control del recurso del petróleo, y las segundas consiguen el apoyo de las elites globales para consolidar su poder en el seno de los países productores.

Paralelamente se formó también una burguesía ligada de forma directa al poder del régimen. Ya sea porque el estado proporcionó de forma institucional a algunos individuos los medios para invertir (casos de Libia y Arabia Saudí), ya sea porque los funcionarios del estado bien situados desviaron recursos hacia el sector privado para beneficio propio (casos de Argelia, Siria, Iraq...), ya sea porque algunos empresarios aprovecharon las rentas y la demanda generadas por el petróleo

para invertir en sectores no deficitarios (situación que se repite en todos los países). En general, la burguesía que forma parte de este último sector se siente desplazada y maltratada por el régimen, pues entiende que los otros dos sectores hacen una competencia desleal al tener ventajas de las que ellos no disfrutaban (6).

De esta forma, el estado y la renta se unieron como recursos de poder en manos de las elites que los podían controlar. Estas elites acumularon un poder desproporcionado en comparación a otras épocas o a otras elites contemporáneas, sin casi necesidad de utilizar la coacción pues la capacidad distributiva generada por la renta era suficiente para controlar a la población y para convertir en clientes a los grupos competidores en la acumulación de poder.

No obstante, los estados árabes están anclados en un sistema internacional del que no pueden, y las elites no quieren, escapar. Sobre todo los productores de petróleo, por el peso del recurso en el sistema económico y de poder global, tienen un papel inevitable en la configuración del sistema de poder mundial. Por esta razón, tanto el petróleo, como las elites que gobiernan los estados productores, como las mismas sociedades se deben situar en el contexto del proceso global de acumulación de poder y definir su función en esta competición. Es en el análisis del sistema global que vemos claramente la posición que ocupan los regímenes. La perspectiva estructuralista en términos de Centro y Periferia continúa siendo útil para comprender la función de las elites en los países productores de petróleo, y por extensión en las sociedades no industrializadas. La aproximación de Johan Galtung que analiza las relaciones del centro del Centro con el centro de la Periferia(7) coincide con la Paul Vieille quien habla de clase funcional al referirse a las elites de los estados productores de petróleo (8).

En uno y otro caso, la posición de las elites de la Periferia está ligada a su función como facilitadora de los intereses de las elites del Centro del sistema. El proceso de acumulación de poder y de capital en el núcleo del sistema global exige alianzas con sectores de las elites que compiten por la acumulación de poder en la Periferia y que se pueden beneficiar de esta alianza. Al mismo tiempo, las elites autóctonas necesitan cada vez más la alianza con las elites del Centro del sistema para mantener su capacidad de acumulación y su posición ventajosa en las relaciones con la población de sus sociedades.

La estabilidad y el poder de las elites en los países periféricos dependen tanto de su relación con las elites de los países desarrollados como de su capacidad de acumulación de poder en sus propias sociedades. Y una y otra dimensión están directamente relacionadas pues la acumulación de poder ha dependido durante mucho tiempo de la renta generada por la relación con el exterior. Renta ligada al petróleo en el caso de los países productores, a otros recursos en otros casos y también

a la deuda externa en la mayoría de ellos.

La distribución de la renta se organiza según distintos modelos, pero en todos tiene la misma prioridad: consolidar el poder de las elites gobernantes. Esto significa que el principal recurso en el proceso de acumulación de poder es el estado, pues de su control depende la capacidad de gestionar el petróleo y la distribución de la renta. Esto significa también que la función de las empresas estatales no es la eficiencia en términos de generación de beneficios y aumento del capital sino la distribución de la renta y la legitimación del poder de las elites. La función de las empresas estatales y de la administración es la salarización de la distribución de la renta.

Por esta razón, la forma de medir el éxito y el fracaso del modelo económico establecido se debe adaptar a la función principal: la acumulación de poder, y por tanto durante un largo período se debe hablar de éxito de estos modelos a pesar de que su eficiencia económica fuera más que dudosa pues en general eran deficitarios.

Desde la perspectiva de la competición por la acumulación de poder, en muchos de los países productores de petróleo o dependientes de otros tipos de renta exterior (9), podemos ver que el recurso fundamental en términos de poder es el estado, por encima del capital. Por esta razón, la principal disputa fue por el control del estado y su crecimiento y consolidación, pues fue el estado el que dio el acceso a la renta del petróleo y al control de buena parte del capital. Así, la función principal de las elites no será la maximización del capital, evidentemente sin despreciarlo, sino la maximización del control sobre el estado, y la actividad económica se supeditará a esta prioridad. Por esta razón no se puede hablar de fracaso en las políticas económicas, ni en la industrialización, ni en la agricultura, pues se consiguieron los objetivos buscados.

En contra del discurso oficial que presenta la actividad económica del régimen como un camino hacia el desarrollo, éste habría sido contraproducente para las mismas elites. El desarrollo real de las sociedades árabes y de sus economías habría facilitado el surgimiento de otras elites en la competición por la acumulación de poder y de sectores de la población con voluntad y capacidad para hacer oír su voz, lo que habría redundado en pérdida de poder de las elites controladoras del estado.

La distribución de la renta como un recurso de poder generó cinco sectores diferenciados por su posición respecto al control del estado y de la renta, y evidentemente respecto a sus beneficios:

1. La elite con capacidad de control sobre la renta, inmersa en la competición por la acumulación de poder y con lazos directos con las elites corporativas y

- gubernamentales que controlan el Centro del sistema global.
2. La burguesía, principalmente mercantil, que compite por la acumulación de poder principalmente desde el capital privado, cada vez más amplia a consecuencia de las reestructuraciones neoliberales de reducción del estado. Este sector tiene lazos directos con el primero y en muchas ocasiones es coincidente pues las elites que tienen capacidad para utilizar el estado para acumular poder no renuncian a utilizar el capital, y al mismo tiempo, las elites que tienen acceso al capital tampoco renuncian a competir por el control del estado. De la misma forma, los regímenes establecen relaciones clientelares sobre esta burguesía pues la dependencia del capital privado respecto de la renta y de la demanda generada por la renta le resta autonomía.
 3. Otras elites que controlan otros recursos de poder, como las autoridades tribales o los dirigentes religiosos. Con éstos la elite gobernante acostumbra a establecer relaciones de patronazgo gracias a la renta del petróleo. En muchas ocasiones estas otras elites apartadas del control directo del estado se convierten en intermediarios en la distribución de parte de la renta hacia aquellos sobre los que tienen lazos de poder.
 4. El sector salarizado que recibe parte de la renta directamente en forma de salarios y que es el sector trabajador imprescindible para el funcionamiento de las empresas y de las instituciones estatales. El control se extiende también sobre los trabajadores no sólo a través de la renta, en la forma de salarios, sino también por la prohibición de toda actividad sindical o, en los casos en que el régimen utiliza el discurso “socialista”, por la imposición de unos sindicatos verticales controlados desde la administración.
 5. La gran mayoría de la población que participa en la distribución de la renta de forma indirecta, por sus lazos con los trabajadores o con ayudas, subsidios y algunas políticas estatales. El paro está muy extendido, aunque a veces disimulado por la salarización de la distribución de la renta a través de la ocupación laboral no productiva en las empresas y a través de unos ingentes aparatos burocráticos. El enorme paro es totalmente lógico pues la acumulación de poder no está ligada a la extracción de la plusvalía del trabajo, sino al control del estado y a la renta del petróleo, por lo que el trabajo pierde valor para las elites, y por tanto también los trabajadores. Sin embargo, este enorme sector sin trabajo, que aumenta cuando disminuye la renta pues ya no es posible mantener la ficción salarial, se convierte en una importante fuente de inestabilidad en las épocas de precios bajos del petróleo y de menor renta pues esta población es la que padece las mayores pérdidas de calidad de vida. Y, por otra parte, estos sectores, alejados de las relaciones de producción y más alienados, son especialmente receptivos y

movilizables por los mensajes ligados a ideologías basadas en la identidad nacional o religiosa, como los nacionalismos o el islamismo.

La función básica de la renta en la acumulación de poder transforma las relaciones sociales y las adapta a las necesidades de las elites. Se desarrolla una cultura de la renta que desvaloriza el trabajo y hace aumentar el consumismo y la corrupción. La marginación de la mayoría de la población de los procesos productivos y de gobierno de la sociedad conduce también a la ausencia de espíritu cívico, creativo y de responsabilización. En el mundo laboral las funciones más importantes son las de control y de gestión, pues la productividad pierde importancia al no ser el objetivo de la organización del trabajo. En este sentido, las relaciones del poder con los trabajadores sólo son importantes cuando afectan a la producción de petróleo, lo que significa que en todos los demás sectores se asentará un gran menosprecio por los obreros y por los sindicatos, mientras que aquéllos que tienen la suerte de trabajar en el sector del petróleo están en una situación privilegiada pues las elites hacen lo posible para evitar que la conflictividad laboral afecte la exportación del petróleo y la generación de la renta.

Por otra parte, las elites en el poder también harán lo posible para evitar que se rompa la relación de dependencia respecto al Centro del sistema global, pues su posición de aliadas de las elites del Centro está directamente ligada a la dependencia. La transformación de las relaciones de producción y de poder globales convertirían a las elites locales en prescindibles, por lo que desaparecerían. Esta dependencia y alianza con las elites del Centro se refleja incluso en términos culturales, con una occidentalización mucho mayor de las elites en contraste con unas clases populares “orientales” (10).

Las diversas tensiones en los países productores y las diferencias en los procesos de independencia condujeron a dos modelos distintos de organización económica y social: la industrialización y la especialización. Estos dos modelos también fueron reflejo de las relaciones que se establecieron con Occidente: la confrontación y la asociación (11). Las elites de los países con mayor población y que habían conseguido la independencia con enfrentamientos más duros con las potencias coloniales se vieron obligadas a adoptar un modelo industrializador. El control del estado y de la población no se podía limitar al recurso de la distribución de la renta, pues la capacidad de movilización de la población suponía una amenaza contra la cual se debía enfrentar un discurso ideológico de progreso e independencia. El nacionalismo se convirtió en uno de los principales recursos de poder en manos de las elites que controlaban la ideología. Las ideas nacionalistas y el mensaje del progreso exigían una política económica en consonancia, que ofreciera desarrollo autónomo, trabajo y crecimiento.

“La legitimidad histórica –haber dirigido la independencia- constituyó el elemento sustancial que dotó a los gobernantes poscoloniales del reconocimiento de sus poblaciones; dicha legitimación se prolongó con la promesa de lograr la independencia política y el desarrollo económico. (...) A medida que [las elites poscoloniales] tenían que dismantelar el pacto social que sustentaba el Estado protector sin haber cumplido sus promesas de no dependencia y desarrollo económico (legitimidad nacionalista), el malestar de la ciudadanía se polarizó en la falta de participación y representación sociopolítica (legitimidad democrática) y en la necesidad de recuperación cultural de los valores islámicos propios (legitimidad islámica) frente a los exógenos (...). La sequía progresiva de todas esas fuentes de legitimación lleva hasta el momento actual, en que el contrato social, el modelo político y la identidad cultural están en crisis” (12).

Así, en países como Iraq y Argelia la distribución de la renta se hizo a través de la inyección permanente de petrodólares en unos sectores industriales que no tenían el objetivo del crecimiento ni de la productividad, sino el de responder a las demandas de la población para asegurar la estabilidad de los regímenes.

Como hemos comentado, por esta razón no se debe hablar de fracaso del modelo, ya que su finalidad no era ni el desarrollo ni la acumulación de capital a través del beneficio, sino la acumulación de poder en manos de las elites que controlaban el estado y la renta. Y en este sentido, el modelo industrializador fue un éxito mientras la entrada de la renta lo pudo mantener.

El otro modelo se centra en la especialización en el mismo sector del petróleo, con refinerías y petroquímicas. Este modelo implica abrir las puertas a las corporaciones multinacionales y al mismo tiempo invertir en el exterior, por tanto una inserción mucho más directa en los circuitos financieros y comerciales globales. Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí son ejemplos claros de este modelo, i en la actualidad Argelia está empezando a seguir el mismo camino (13). En estos países la distribución de la renta se hace de una forma directa o utilizando las redes clientelares ya existentes. La legitimación ideológica en Arabia Saudí se produce con otro discurso muy alejado del nacionalismo naserista y de las ideas de desarrollo asociadas al progresismo socialista, es más, la ideología que llega de Egipto se ve como una amenaza al régimen. El hecho de que Arabia Saudí no surgiera de una lucha anticolonial y de que Kuwait fuera una concesión británica no es ajeno a la posición más débil de la población respecto a las elites. Sin embargo, en el caso saudí, el régimen debe enfrentarse a otros actores capaces de participar en la disputa por los recursos de poder, como las elites religiosas o las elites tribales, por lo que las redes clientelares y la ideología tienen características distintas a los países industrializadores. Finalmente, también se debe señalar el hecho de que los países que optan por la especialización tienen una demografía menor, de forma que es más fácil la distribución directa de la renta sin que sea tan necesario disimularla a través de mecanismos industrializadores.

El ejemplo de Argelia

El modelo de industrialización seguido en Argelia fue el de la “industria industrializadora”. Desde el punto de vista teórico, la inversión en la industria de base en sectores como la siderurgia, la química, el material para la construcción o la energía, debía servir de motor de la economía. Este modelo se basaba también en una planificación centralizada que seguía el ejemplo soviético, lo que era fácil dado que el estado era el principal si no único inversor, lo que obligaba a un gran intervencionismo y permitía la centralización de las decisiones. Sin entrar en la discusión teórica y economicista sobre la bondad del modelo, podemos decir que en el caso argelino lo que se ha presentado como un fracaso del modelo de desarrollo debe ser analizado desde la óptica de los objetivos reales, no de los teóricos. En este sentido, al igual que el ejemplo soviético mucho más extremo en la estatalización y la centralización de las decisiones, el modelo se reveló un éxito pues permitió alcanzar el objetivo: la concentración y acumulación de poder en manos de las élites que tenían capacidad para controlar el estado.

El proceso de acumulación de poder a través del estado implica una política de nacionalización, centralización de decisiones y planificación de los procesos de producción que se extiende a prácticamente todos los ámbitos de la economía. Esto no era inevitable, es más, al inicio de la independencia existía dentro del FLN una corriente favorable a la autogestión con una gran desconfianza contra la centralización del poder a través del estado. Sin embargo, este sector fue eliminado con el golpe de estado del 19 de junio de 1965, que dejó las manos libres a las élites de las fuerzas armadas que además del ejército pasaron a controlar el aparato estatal (14). La toma del poder de los militares exigió un discurso legitimador, que se centró sobre todo en el desarrollismo y la modernización en el ámbito económico, convirtiendo a la industria en el símbolo de la Argelia independiente, y en la institución básica de integración de la población ya que eran las nuevas empresas las que transformaban a los excluidos en trabajadores y ciudadanos (15). Este discurso se apoyó en la dimensión nacionalista de la liberación anticolonial y en la influencia socialista que llegaba desde el este de Europa y de los movimientos de liberación nacional. Tanto el nacionalismo como el socialismo de inspiración soviética facilitaron la concentración de las decisiones, de la renta y de la inversión en el estado y, por tanto, en manos de las élites que lo controlaban.

La cúpula del ejército y del estado, una vez apartados del poder los sectores del partido liderados por Ahmed Ben Bella que podían disputar el control del estado, tuvo las manos libres para acelerar el proceso de acumulación de poder. La ausencia de una burguesía asentada con control sobre el capital, la desmovilización de la población después de la independencia, el control de la ideología nacionalista desde la jerarquía del partido y del estado, y la construcción de los mecanismos distributivos

gracias a la renta del petróleo, facilitaron la concentración del poder en las elites que dominaban el ejército, el partido y el estado. En el terreno económico y de control de la renta del petróleo, el principal instrumento era la empresa estatal SONATRACH desde la nacionalización de los hidrocarburos en 1971.

La función distributiva del aparato productivo hace que las empresas sean deficitarias, con lo que no tienen capacidad de responder ni tan siquiera a la demanda que ellas mismas generan, o habría que decir que es una demanda generada por la renta del petróleo distribuida a través de la ficción de las empresas estatales. La productividad desciende y esto no repercute en la industria estatal pues es el petróleo el que la financia, y cuando la renta del petróleo no es suficiente lo hace la deuda. La renta del petróleo permitía responder a las necesidades inmediatas importando del exterior, esto significaba que, por ejemplo con la tecnología, era más fácil comprar que invertir en investigación y desarrollo, de forma que la misma renta se convertía en un obstáculo para avanzar en la senda del desarrollo autónomo y se convertía en un factor de crecimiento dependiente. Sin embargo, en términos prácticos, el sistema facilitaba la acumulación de poder pues las industrias continuaban sobreviviendo, pagaban salarios y cumplían con su función distribuidora, la importación permitía suculentos negocios a las elites argelinas y exteriores, y los tecnócratas no tenían tecnología propia pero sí una aparente actividad de gestión que les situaba en una escala intermedia de la jerarquía de poder.

El aumento de la capacidad de consumo gracias a la distribución de la renta exterior impulsa la demanda. Como el aparato productivo nacional no tiene capacidad de responder a la demanda se debe importar, y para evitar un proceso inflacionario las importaciones deben ser superiores a la demanda, lo que acaba generando una necesidad de divisas que, salvo en los momentos de mayores alzas del precio del petróleo, en muchos casos acaba obligando incluso a generar deuda.

Este fenómeno es todavía más evidente en la agricultura. El estado se interesa poco en el mundo rural pues los mecanismos de distribución de la renta se centran en el mundo urbano al llegar a una población mucho mayor con un coste menor y por tanto con un efecto de acumulación de poder a mayor escala. Los efectos de la distribución de la renta son mucho más visibles y múltiples en la ciudad, tanto por la concentración de la población como por la mayor facilidad de distribución de forma directa a través de los salarios públicos o indirectamente a través de las inversiones públicas.

Las políticas estatales hacia el sector agrícola, aparentemente de gran impacto en los años de las revoluciones verdes, en realidad son una forma de extender el control del estado al mundo rural. Las políticas del estado hacia el campo no sólo no logran frenar

la emigración hacia las ciudades, sino que la fomentan al reducir la autonomía y la capacidad de decisión de los campesinos, lo que se suma al efecto llamada de la distribución de la renta en las ciudades. El aumento de la demanda de alimentos en las urbes que van creciendo supera la capacidad de producción nacional, iniciándose el ciclo de importaciones. Como se trata de productos de primera necesidad y el régimen debe mantener el contrato social distributivo con la población, los alimentos se subvencionan y se aumentan las importaciones, lo que debilita todavía más la producción nacional que cada vez tiene más dificultades para competir, de forma que el ciclo de éxodo hacia la ciudad se acelera.

Las políticas agrarias, a pesar del discurso ideológico, siguen la misma dirección que las políticas industriales y petrolíferas: el objetivo de la concentración de poder (16). Por una parte, la agricultura queda en un lugar secundario pues como mecanismo de acumulación está lejos del petróleo y la industria, y el medio rural no facilita tanto como la ciudad las políticas distributivas y de control. Por otra parte, las transformaciones que se presentan como revolucionarias cambian muy poco, y en ocasiones a peor, las condiciones de vida de la mayoría de los campesinos. La estructura de la propiedad de la tierra mantiene el desequilibrio, con un gran número de minifundios que agrupan un pequeño porcentaje de las tierras cultivadas y que acostumbran a ser las de menor rendimiento, mientras que incluso después de lo que se presenta como revolución agraria subsisten las grandes propiedades de cultivos extensivos, que crecerán en los años ochenta y noventa con los procesos de privatización. El trabajo agrario mayoritario mantiene la tendencia a la precarización estacional, con capas cada vez más amplias de pequeños propietarios que se ven obligados a vender también su trabajo en el mercado jornalero.

La nacionalización de algunas propiedades, pues, no tiene un sentido liberador ni de reforma agraria para responder a las necesidades de los campesinos, sino que tiene el objetivo de consolidar el poder estatal y el control sobre la población, y también de reducir el número de competidores por la acumulación de poder. Esto se puede apreciar, además, en el hecho de que la nacionalización en muchos casos se inicie con las tierras comunales que daban autonomía a los núcleos rurales ante el estado y ante los grandes propietarios, y por tanto eran un elemento democratizador de las relaciones de producción en el ámbito agrario.

Las explotaciones estatales, al igual que las empresas industriales, al no tener una función económica sino de acumulación de poder, tampoco deben presentar balances positivos en términos de aumento de capital, por lo que la productividad no sólo no crece sino que disminuye. Durante años se hace un gran esfuerzo para encuadrar al campesinado en las empresas estatales y cooperativas controladas por el estado. Para atraer a los campesinos y para que acepten ceder su

autonomía, además de otros instrumentos todos ellos financiados por la renta del petróleo, se ofrecen contrapartidas como un salario mínimo garantizado, ventajas fiscales, y la construcción de “ciudades socialistas” que urbanizan el mundo rural y que facilitan el control y provocan la ruptura de los viejos mecanismos de autoridad y de solidaridad.

Los campesinos independientes, por su parte, tienen un acceso mucho más reducido a estas ventajas, y padecen grandes dificultades de financiación pues la principal fuente de crédito es el estado, que controla la renta, y que la dedica a los sectores que el régimen controla directamente. Desde la perspectiva de la acumulación de poder, dar crédito al sector privado significa favorecer la acumulación de poder de las elites competidoras o, lo que es incluso peor, perder capacidad de control sobre la población que actúa de forma autónoma.

Finalmente, también para los propietarios agrícolas, pequeños y grandes, es más beneficioso invertir sus beneficios, pequeños y grandes, en los sectores que aprovechan mejor la renta del petróleo, principalmente el comercio, por lo que la desinversión en la agricultura independiente aumenta a medida que crece la renta. Estas dinámicas, cuando la renta del petróleo es abundante, no implican que el campesinado se empobrezca, sino que entra en los circuitos de distribución de la renta manteniendo unas condiciones de vida parecidas, aunque en muchos casos acompañadas de un proceso de urbanización. Sin embargo, en momentos de caída del precio del petróleo y de disminución de la renta, la dependencia respecto a ésta deja a buena parte de la población sin recursos, lo que conduce a protestas e incluso a revueltas.

Como comentábamos, la “revolución agraria” no tiene la función de dar respuesta a las necesidades de los campesinos, ni mucho menos de darles voz y voto en la gestión de sus asuntos. Al contrario, las transformaciones llevadas a cabo por el intervencionismo estatal tienen el objetivo de reducir tanto la capacidad de competencia por el poder de las elites tradicionales latifundistas no ligadas al régimen, como del campesinado pobre que reclama mejores condiciones de vida. De los primeros al restarles capacidad de acumulación de recursos que después puedan utilizar para competir con las elites de la revolución. De los segundos al restarles autonomía o impedir que la adquieran, y esto, en el mundo campesino se consigue eliminando la propiedad agraria autosuficiente conduciéndola al minifundio o a la explotación estatal dirigida por unos ejecutivos que no dependen de sus relaciones con el campesinado sino de su proximidad al poder central. En este último sentido, las reformas son claramente antidemocráticas si entendemos la democracia como la cercanía de las personas a la toma de decisiones que las afectan.

Las reformas tampoco eran de democratización en la industria. La estatalización de la actividad productiva permitió justificar

también las políticas represivas contra los trabajadores y sus demandas, tanto de participación en la gestión como de calidad de vida. El discurso socializante fue excusa para prohibir las huelgas y justificar la sumisión de los trabajadores al estado a través de unos aparatos sindicales controlados por el régimen. De todas formas, hasta mediados los años ochenta, la renta del petróleo facilita esta sumisión, pues la población se desmoviliza al aceptar el contrato social según el cual el estado da respuesta a sus necesidades y la gente cede el poder a la elite.

El mecanismo distributivo funciona mientras los precios de petróleo lo permiten. Cuando cae el precio del barril aumenta la deuda y, finalmente, cuando el estado ya no puede mantener sus políticas distributivas, la población reclama el bienestar que se creía asegurado y aparecen nuevos actores con capacidad de liderar estas reivindicaciones, como los grupos islamistas con el Frente Islámico de Salvación (FIS) a la cabeza, o los grupos nacionalistas de la Cabilia.

Tanto el islamismo como el nacionalismo beréber, además, demuestran que el régimen ha perdido en gran medida el control ideológico de la población y que otros sectores son capaces de movilizar a la opinión pública con otras ideologías. La disputa por el recurso ideológico se está saldando con la derrota del régimen, que no es capaz de ofrecer un discurso creíble después del desengaño de los argelinos con las promesas de modernidad que acompañaban al discurso del nacionalismo y del socialismo árabes. La fuerza del islamismo en el mundo árabe se entiende en parte por esta pérdida del control ideológico de las elites surgidas de las independencias. Los ejemplos de Egipto y de Argelia son especialmente clarificadores a este respecto.

Ante la amenaza de inestabilidad y ante la posibilidad de la pérdida del control político sobre el estado, las elites gobernantes responden con distintas políticas. Por una parte, algunas elites hacen lo posible por apartar la renta del petróleo del control de estado para que, en el caso de pérdida del gobierno, la renta quede en las mismas manos. Así se acelera el proceso de privatización de la explotación del petróleo y el gas, permitiendo la entrada de corporaciones extranjeras y modificando el tipo de contratos para facilitar esta penetración. Esta dinámica se ve apoyada por la necesidad de inversión para modernizar la tecnología y por las políticas impuestas por las instituciones internacionales capitaneadas por el FMI.

En la competición por la acumulación de poder, tanto o más importante que el control directo de los recursos de poder es impedir que los otros competidores puedan acceder a ellos. La privatización tiene esta finalidad fundamental: sabotear la capacidad de las demás elites de controlar la renta del petróleo en el caso de que consigan hacerse con el estado. Evidentemente, además las elites privatizadoras intentarán que el proceso les permita aumentar su poder o consolidar el control del recurso. Así, o asumirán el control de las empresas

privatizadas, o conseguirán voluminosos sobornos y comisiones de los beneficiados por la privatización, acumulando de esta forma el capital que se transforma en el principal recurso de poder a medida que el estado pierde peso. Sin embargo, las privatizaciones no se pueden llevar a cabo sin resistencias tanto por parte de algunas elites del régimen más alejadas de los sectores a privatizar y por tanto marginadas en el proceso, como por parte de los ejecutivos y de los trabajadores de las empresas, y también de la población, que ven como con la privatización perderán el trabajo y los beneficios de la distribución de la renta.

Ayubi propone distintos modelos de privatización en el mundo árabe. El enfoque directivo, dando mayor autonomía a las cúpulas de las corporaciones estatales o “contratando” a empresarios privados para que gestionen bienes públicos. El enfoque populista, vendiendo los bienes estatales a cooperativas o traspasando su propiedad a los trabajadores. Y el enfoque capitalista, con la venta parcial o total de propiedades del Estado, o desmantelando el sector público de forma que la competencia sea sólo privada (17). Las políticas de privatización y las modalidades adoptadas dependerán de los equilibrios de poder en el seno del sistema, aunque todas ellas son producto de la debilitación de las elites estatales, ya sea porque otros actores ganan fuerza (por ejemplo las capas tecnocráticas que gestionan el sector público, o los sectores populares que exigen un control más directo sobre los medios de producción, o los sectores de capital que quieren eliminar la competencia del Estado) o porque temen perder la capacidad de controlar el Estado (por ejemplo por la creciente movilización popular o por la fuerza de sectores de oposición, con lo que las elites estatales pueden preferir competir a través de la acumulación de capital en vez de a través del control del Estado).

Podemos apuntar también otra dinámica presente en el mundo árabe. Cuando algunos sectores directivos de corporaciones públicas consiguen una mayor autonomía, pueden buscar alianzas con el capital internacional para aumentar su poder. De esta forma, a pesar de que el capital nacional de la corporación continuará siendo estatal, el margen de acción de la corporación se habrá incrementado merced a la inversión exterior. El ejemplo de Egipto que muestra Ayubi pone de manifiesto como primero las elites corporativas estatales consiguieron mayor capacidad de actuación con Sadat. Posteriormente, a consecuencia de la crisis económica y fiscal ya no se pudo continuar manteniendo la función distributiva de la renta exterior de estas corporaciones, y el proceso de acumulación se dirigió prioritariamente al aumento de capital, lo que dio todavía más autonomía a los directivos de las empresas. Seguidamente, esto condujo a las alianzas con el capital exterior, para asegurar y potenciar la función de rentabilidad (no distributiva) en las corporaciones, además de obligar a disminuir la planificación y la gestión centralizada desde las elites estatales (18). En este sentido, es sintomático que en muchas ocasiones las elites

corporativas de empresas estatales prefieran las alianzas con el capital exterior al capital privado nacional, pues para ellas la principal competición por el poder se produce a nivel nacional y se ven las alianzas exteriores como recursos de poder en esta competición con las elites estatales centrales y con las elites capitalistas nacionales.

En Argelia encontramos otro ejemplo de estas tensiones, iniciadas por la población al protestar por la pérdida de calidad de vida, y de la intervención de actores exteriores. Según Iván Martín:

“El abandono a su suerte de las masas empobrecidas de los arrabales de las ciudades originó un extendido descontento y convirtió la cuestión social, más que la propia exigencia de democratización, en la piedra de toque de toda la transición política emprendida por el régimen.

En octubre 1988, este descontento estalló en una oleada de revueltas populares que obligaron al régimen a replantear su estrategia política, dieron lugar a una tímida apertura política y democratización en el orden político (que culminó, como se sabe, con el triunfo electoral del FIS abortado por el régimen militar). La motivación profunda de estas "revueltas del pan" obedece a una consigna tan simple como la carestía y la escasez de alimentos y otras necesidades básicas.

Pero, en el ámbito económico, la respuesta consistió en intensificar una política de ajuste caracterizada por la liberalización de mercados y la desregulación de los sectores más sensibles y por la aplicación de un estricto programa de austeridad económica impuesto por los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI). La represión de las revueltas y la nueva vuelta de tuerca a la situación económica desesperada de la población argelina abonaron la capitalización del descontento por parte de la única fuerza política que se configuraba como alternativa real al régimen existente: los partidos islamistas.

Aun a riesgo de simplificar, es posible ver en la crisis social argelina un proceso de reasignación conflictiva del poder social y político en el nuevo marco de una economía de mercado que ha desplazado al estatismo autoritario imperante en los últimos 30 años, sin conseguir desbancar, sin embargo, a las elites militares, tecnocráticas y administrativas características del mismo” (19).

Algunas elites del régimen, al ver peligrar su control del Estado, decidieron hacer lo posible por separar el proceso de acumulación de las instituciones estatales, y para ello recibieron la ayuda de las instituciones financieras internacionales, las grandes corporaciones extranjeras y algunos gobiernos. Sin embargo, esto no sucedía sin tensiones en el seno del régimen pues algunas de las elites salían perdiendo con los cambios, y tampoco ocurría sin enfrentamientos con el pueblo que veía como la acumulación de las elites se hacía con enormes pérdidas en su condición de vida. Estas dinámicas se expresaron sobre todo en el control del petróleo y el gas.

Desde mediados los años ochenta las leyes sobre los hidrocarburos han ido evolucionando en función de las necesidades de las elites políticas, de las presiones exteriores y de la competición por el poder en el seno del régimen (20). Así, el primer paso, en 1986, es dar respuesta a las necesidades del régimen en un momento en que la renta disminuye a causa de la bajada de precios del petróleo, y también responder a las

presiones de las instituciones internacionales. La ley de este año empieza a abrir la puerta a la inversión exterior, lo que continuará en 1991 y sobre todo en 2005. Con las nuevas leyes, la empresa estatal Sonatrach irá cambiando su función de instrumento rentista hacia la acumulación de poder a través del capital, lo que implica una dimensión más comercial y una creciente integración con las corporaciones internacionales, e incluso en la práctica conduce a la desaparición del monopolio estatal permitiendo las concesiones a las corporaciones extranjeras. Sin embargo, las tensiones en el seno del régimen y con la población son fuertes y, como escribe Aurèlia Mañé, al año siguiente se producirá una modificación de la ley que puede interpretarse en clave político nacional. “En un momento de rumores sobre su salud y la sucesión de Bouteflika, su anuncio de modificaciones de una Ley altamente impopular y que ha enfrentado a los ya enfrentados ‘clanes’ argelinos, durante más de cuatro años, podría interpretarse como un movimiento de Bouteflika para recabar apoyos internos. (...) Por otra parte, los actuales precios del crudo y los beneficios de las empresas del sector favorecen discursos –como históricamente ocurre cada vez que éstos aumentan- que reclaman un mejor reparto –entre las empresas y el Estado- de la renta del subsuelo”⁽²¹⁾.

Las disputas sobre las leyes de hidrocarburos y el papel de la empresa Sonatrach implican a los clanes del régimen, tanto a los que dependen de la renta como a los que acumulan poder gracias a las alianzas con las corporaciones exteriores y al aumento de capital de Sonatrach. Implican también a las elites directivas de las corporaciones extranjeras, a gobiernos ligados a estas corporaciones, a las instituciones financieras internacionales e incluso a la Unión Europea cuando unifica el mercado del gas europeo creando un cártel de la demanda que debilitará a la oferta argelina. La competición por la acumulación de poder, en este caso trasladada ya al ámbito global, la podemos ver en la colaboración entre Sonatrach y Gazprom para hacer frente a la política de la UE y a las fusiones y alianzas entre las grandes corporaciones o en las propuestas de creación de una OPEP del gas ⁽²²⁾. Para las elites que controlan la producción del gas en Rusia y en Argelia, la única forma de mantener también su autonomía y su cuota de poder es aliándose a su vez para hacer frente a los nuevos equilibrios generados en Europa.

En el sector industrial, al iniciarse el proceso de privatización de las empresas estatales, la acumulación de capital ganó peso en la competición por el poder, por lo que las políticas económicas debieron modificarse. La eficiencia y la productividad pasaron a tener importancia, al igual que la explotación del trabajo. La disminución de la renta al caer los precios del petróleo motivaron que las empresas perdieran valor en su función distributiva para acercarse a la función normal en cualquier sistema capitalista: la acumulación de poder a través de la acumulación de capital en manos de las elites que las controlan. Así, coincidían la voluntad de las elites de mantener el control

sobre la industria a través de la privatización, con la incapacidad de las empresas estatales de mantener su función de estabilizar y legitimar el régimen respondiendo a las demandas de la población de participar en el reparto de la renta. Chadli Benyedid impulsó esta dinámica, primero fraccionando las empresas estatales y después poniéndolas en venta. Sin embargo, la política de privatización del sector industrial no tiene un gran atractivo debido a que se trata de un sector ineficiente, dependiente del exterior y con un mercado inundado de importaciones.

El resultado de estas tensiones en el mundo árabe ha sido unas economías bifurcadas, con sectores integrados en el mercado global y otros que se mantienen bajo el control y la protección del Estado. Las elites políticas han conseguido situarse en la intersección de estas dos esferas, definiendo sus fronteras y los procesos de intercambio (23). Estas elites compiten por la acumulación del poder que se puede extraer de cada uno de estos espacios. Y, como es evidente, las elites que más se benefician de una o de otra esfera intentarán que ganen peso la una o la otra para así ganar ellas también en el equilibrio de poder.

Una dimensión importante de los procesos de privatización y liberalización económica es que se han conseguido separar de los procesos de democratización. Han sido consecuencia de políticas ejercidas por algunos clanes de los mismos regímenes, sin que ello suponga la aparición de unas capas medias que potencien la democracia. Al contrario, la liberalización económica ha ido acompañada en la mayoría de los casos de incrementos en la desigualdad social (debidos sobre todo a la disminución de los mecanismos redistributivos del rentismo), y en la represión (al no tener capacidad los regímenes de dar respuestas a las necesidades de la población y al aumentar las protestas). En algunos casos, cuando los regímenes no han sido tampoco lo bastante fuertes para eliminar las protestas y la oposición con la represión, han debido negociar y dar algunos pasos hacia la liberalización política que se han detenido cuando han recuperado la posición de fuerza.

Así, cuando los mecanismos distributivos ya no funcionan y la población protesta, las elites gobernantes responden recurriendo a la represión, y cuando este recurso no es suficiente se negocian espacios de libertad e incluso la convocatoria de elecciones. Como se sabe, este proceso terminó de forma contradictoria ya que paradójicamente, desde finales de los años ochenta en la política argelina han convivido los mayores avances democratizadores y la represión más sanguinaria.

Esta doble tensión es lo que hace dudar de que Argelia se pueda convertir totalmente en una “república petrolera” (24), una dictadura a imagen y semejanza de las repúblicas bananeras, como por ejemplo está ocurriendo en Guinea Ecuatorial. La dinámica hacia la privatización de los recursos petrolíferos y el

uso de la coacción y la represión como instrumentos claves del poder son signos de avance en esta dirección. Pero la capacidad de la población argelina de imponer algunos avances democráticos permite pensar que hay unos límites que las élites en el poder no podrán cruzar.

El ejemplo de Arabia Saudí

La explotación del petróleo en Arabia Saudí fue un factor que se sumó a las dinámicas ya existentes de competición por el poder. En este proceso, las élites ligadas a los Saud fueron capaces de controlar los mayores recursos de poder y de establecer las mejores alianzas. Como explica Vieille, el estado saudí se fundó sobre un pacto entre los Saud y un nombre cada vez mayor de tribus del Neyed. El estado fue el mecanismo que pacificó las relaciones entre las tribus, pero para ello debió de ofrecerles en el exterior los beneficios que buscaban en las disputas interiores. Para ello recibió la ayuda ideológica del wahhabismo, la doctrina unitarista y fundamentalista que facilitó a los Saud una milicia y el cuerpo de derecho islámico que les permitió romper el derecho consuetudinario tribal y la cohesión clánica para construir una incipiente cohesión estatal. Las milicias fueron los Ijuan, la “hermandad” formada por nómadas seguidores del wahhabismo, que se pusieron a sueldo de los Saud como un ejército que no dependía de los acuerdos con los clanes.

La implantación del derecho islámico permitió debilitar también las bases jurídicas de la solidaridad tribal y de su cohesión, lo que reforzó los lazos establecidos por el estado dominado por los Saud. Un ejemplo de la imposición de las normas jurídicas que superaban a la autoridad tribal lo encontramos en el agua. Contra el derecho de la tribu que reserva a sus miembros el uso de los pozos que ella ha abierto, igual que el uso de los pastos y la prohibición de construcciones permanentes en el espacio que controla, se opone el derecho universal que facilita la estatalización y debilita los lazos clánicos. La entrada de las relaciones capitalistas de producción en la agricultura aceleró el proceso de debilitación del derecho tribal, al tiempo que modificó las relaciones de propiedad sobre el suelo. La agricultura destinada al mercado nacional y exterior exige un nivel de productividad elevado, al que los pequeños propietarios no tienen acceso. La inversión en fertilizantes, insecticidas, mecanización del cultivo e infraestructuras de regadío exige tener acceso al crédito, que depende en gran parte de los contactos con las élites del régimen. De igual modo, el acceso a la tierra y a la capacidad de riego también está directamente ligada a la inserción en las redes clientelares, por lo que la nueva burguesía agraria está lejos del mundo rural y muy cerca de los círculos de poder, de forma que entre los nuevos inversores agrarios encontramos élites del mundo político, económico e incluso religioso. La presión sobre los pequeños agricultores es

incluso física, pues al no tener capacidad de inversión en ocasiones pierden incluso el acceso al agua ya que la perforación de pozos en profundidad de las explotaciones capitalistas modernas secan los pozos circundantes de los pequeños propietarios que no pueden llegar a las mismas profundidades (25).

Sin embargo, estos avances de la casa Saud no sólo fueron posibles por la alianza con los wahhabíes, también se debió crear un sistema de compensaciones para las elites tribales. Con la expansión de la alianza y del estado, el régimen pudo compensar a las tribus por su aceptación del liderazgo de la casa de Saud y por su abandono de las luchas intestinas. Los recursos para este pago estaban ya ligados a la dimensión rentista, así la expansión permitió controlar recursos exteriores que se distribuían con funciones clientelares, entre los más importantes, la renta que genera el control de la Meca y la organización del Hadj, el preceptivo peregrinaje musulmán. Al inicio la compensación estaba ligada a la unión al clan dominante de los Saud, ya sea por vía matrimonial, por clientelismo o por subsidios. Estas alianzas permitieron entrar en una vía de unificación de intereses que tendió a superar los lazos clánicos y sustituirlos por lazos de clase. El control de la mayor fuerza militar permitió a los Saud dirigir la alianza, pero su posición no era de dominio sino que, sobre todo al principio, debieron negociar con las otras elites tribales e integrarlas en su proyecto. Esto se vió facilitado por el apoyo de las potencias, primero Gran Bretaña y más tarde Estados Unidos, a esta dinámica.

El asentamiento del régimen de los Saud se extendió a otros recursos de poder. Lentamente, la coacción fue centralizándose con la creación de un ejército nacional y de cuerpos policiales del estado. La burocracia jerarquizada también restó autonomía a otros actores sociales y centralizó el proceso de toma de decisiones dejándolo en manos de las elites del núcleo del sistema político. Incluso el control sobre la ideología se centralizó, en parte gracias a la extensión de un aparato de educación que difunde un mensaje que rompe con los valores y costumbres tribales, y en parte gracias a la alianza con los wahhabíes, que ha permitido difundir el discurso unitarista desde una jerarquía religiosa funcionarizada y controlada desde el régimen.

Finalmente, la renta del petróleo a partir de los años cincuenta y del *boom* de los años setenta, permitió consolidar el proyecto estatalista y de acumulación de poder en manos de los Saud y de las elites aliadas y clientelares.

La distribución de la renta empieza por los miembros de la casa Saud, continúa por las elites tribales, la burguesía, las cúpulas religiosas y las elites militares, que en muchas ocasiones forman también parte de las elites tribales. Para la mayoría de la población la distribución se hace a través de la mediación tribal, con la generación de puestos de trabajo principalmente en la

administración, y por mecanismos indirectos como subvenciones, servicios, etc.

Se debe señalar también otra capa de población no rentista, ligada a la producción de petróleo, que configura un proletariado nacional con capacidad de negociación pues puede incidir directamente en la extracción de la renta. En Arabia Saudí, este sector está ocupado en buena parte por población chií que no pudo tener acceso directo a la distribución de la renta y se vio obligada a participar en el proceso productivo. Sin embargo, al igual que en la mayoría de países productores, este proletariado nacional ligado al petróleo, al ser clave en la producción del petróleo y en la generación de la renta, ha podido establecer unas mejores condiciones de trabajo pues tiene una mayor capacidad para reivindicar mejoras salariales y calidad de vida.

Así encontramos que la renta tiene la función básica de desarmar los conflictos por el poder. El principal mecanismo es la compensación para aquellas elites que no controlan ni el estado ni la renta para que no entren en la competición por el poder. Esta compensación se produce dándoles medios para asentar su posición respecto a las capas de población que tienen por debajo en la jerarquía. A los sectores populares que pueden influir en la renta, los trabajadores del sector del petróleo, la compensación se produce con unos salarios mucho mejores que los de categorías parecidas fuera del sector del petróleo.

Cabe añadir entre los sectores sociales de Arabia Saudí a los extranjeros. En primer lugar a la burguesía extranjera no ligada al sector del petróleo, que diferenciamos de las corporaciones que controlan la renta del petróleo pues la posición de una y de otras respecto a las elites saudíes es muy distinta. Los empresarios extranjeros del sector no petrolero, que aprovechan la renta del petróleo para hacer negocios de importación o de sustitución de importaciones, tienen una posición de subordinación a las elites saudíes. Las corporaciones ligadas al petróleo, en contraste, forman parte del núcleo del sistema global y sus dirigentes participan en la competición global por la acumulación de poder, por lo que son las elites saudíes las que tienen una relación de subordinación respecto a estas elites mundiales.

Finalmente, en la capa más baja, encontramos a la inmigración. Tanto a los inmigrantes muy cualificados como a los no cualificados. Unos y otros forman los sectores ligados al trabajo. También entre los inmigrantes se pueden encontrar importantes diferencias, tanto salariales como de estatus social, relacionadas sobre todo con la nacionalidad pues los salarios se pagan en función de los costes laborales en el país de origen del inmigrante, y la mano de obra inmigrada se sustituye en función de estos costes. Así, por ejemplo se producen procesos de relevo de ingenieros libaneses por indios, o de trabajadores yemeníes primero por egipcios y después por filipinos y otros asiáticos

(26). Esto sólo se puede mantener con una política represiva sobre cualquier actividad sindical y con un control muy duro sobre la inmigración, a la que se somete a contratos temporales draconianos no sólo por parte del empresario, sino también por parte del estado que anula casi todos los derechos del inmigrado en un contexto ya de por sí muy autoritario.

No obstante, en la cúpula de esta estructura siempre debe haber un miembro de los Saud. En una sociedad en la que los lazos clánicos continúan siendo tan importantes, la identificación con el estado todavía no es lo bastante fuerte como para poder delegar las funciones de dirección a miembros de otros grupos que podrían disputar el poder o tener unas fidelidades clánicas distintas. Por esta razón, todos los puestos más importantes de control de los principales recursos de poder, empezando por el estado y la renta del petróleo, están dirigidos por miembros de los Saud (ministerios del Interior, de Defensa, Asuntos Exteriores, Petróleo, gobiernos regionales y otros ámbitos territoriales, etc.) (27). El sistema distributivo de la renta permite además una gran discrecionalidad por parte de los miembros de la familia Saud, de los altos funcionarios y de las grandes fortunas, lo que les permite crear lazos clientelares y apoyos propios que son usados en la competición por el poder entre las elites del régimen.

El control del poder desde el régimen se consolida con un juego de alianzas y mecanismos clientelares. Las alianzas con las elites tribales se establecen sobre todo potenciando el papel mediador de éstas. La distribución de la renta del petróleo, controlada en primera instancia desde el estado que a su vez es un recurso en manos de las elites de los Saud, se hace a través de las elites de las tribus que, de esta forma, continúan al mando de los mecanismos de autoridad y de solidaridad en el seno de las mismas. Sin embargo, la producción, el poder e incluso la supervivencia de la tribu dependen ahora directamente del acceso a la renta y de los lazos clientelares con los Saud, por lo que la esencia de la vida tribal y nómada se pierde.

La pérdida de la importancia productiva y económica de la ganadería y de la agricultura obligan a los pequeños propietarios y campesinos a emigrar hacia las ciudades, donde se produce el otro gran mecanismo distributivo de la renta. En las ciudades se concentran también los servicios públicos, la oferta de trabajo en puestos de la administración, dos mecanismos indirectos de distribución de la renta, y también las empresas comerciales *Import/Export* que en realidad son mucho más de importación, pues la exportación es principalmente un reducto del petróleo. Además, la creciente urbanización y expansión de las infraestructuras ha situado al sector de la construcción y de la especulación inmobiliaria a la cabeza de los sectores en crecimiento, evidentemente siempre muy lejos del petróleo y dependiendo de él.

Otro mecanismo de distribución indirecta de la renta es la

kafala , la política de socios autóctonos obligatorios para los inversores exteriores pues los extranjeros no pueden tener existencia jurídica propia. La *kafala* se practica también en otros países productores de petróleo, por lo que debe ser analizada como una institución propia de los estados rentistas en el proceso de distribución de la renta exterior. El *kafil* , el empresario autóctono que pone el nombre para que el extranjero pueda hacer el negocio, se beneficia también indirectamente de la renta y del estado rentista, pues es la renta del petróleo la que atrae al socio exterior y es el estado el que establece la norma de la *kafala* precisamente para asegurar que las elites del país recibirán parte del beneficio. Sin embargo, esto no representa una iniciativa productiva, inversora o comercial del capital autóctono, sino una forma más de distribución de la renta (28). La *kafala* es una muestra más de que en los estados rentistas la ciudadanía establece una relación pecuniaria que garantiza el acceso a la renta de una forma u otra (29).

En un primer momento, la burguesía comercial más asentada en el Hidjaz y con un mayor control sobre la Meca y el Hadj, intentó participar en la disputa por el poder enfrentando a los Saud el nacionalismo árabe que llegaba en la ola naserista. Sin embargo, el apoyo norteamericano a los Saud, la derrota naserista ante Israel en junio de 1967 y la subida de precios del petróleo permitieron a los Saud consolidar su poder y colocar también a la burguesía comercial en la estela clientelar gracias a la renta del petróleo y al control del estado.

De esta forma, al depender directamente de la renta del petróleo, todos los sectores de la burguesía están en una posición de dependencia clientelar respecto a las elites que han sido capaces de controlar los principales recursos del poder, en primer lugar los Saud. El control sobre el crédito que necesita la burguesía comercial, productiva o especulativa está ligado al control de la renta. El control de las concesiones sobre la construcción de infraestructuras, sobre la tierra y el agua, sobre el suministro de bienes al estado, incluso sobre la *kafala* , está en manos del régimen. Esto no significa que el régimen tenga un poder absoluto, pero sí es verdad que las redes clientelares que le permiten crear el control sobre el estado y sobre la renta del petróleo limita la contestación de sectores importantes de las elites burguesas.

Esto implica que la competición por el poder se centra sobre todo en los actores interiores del régimen, los mismos miembros de la casa Saud y el alto funcionariado. Hacia el exterior, la competición por el poder se centra en dos ámbitos distintos: 1. Las elites que tienen capacidad para controlar otros recursos de poder, como anteriormente el nacionalismo árabe de tendencia naserista y actualmente la ideología islamista desligada del régimen y de las jerarquías religiosas oficiales; 2. Algunos sectores de la población que son capaces de escapar a los controles ideológicos y establecer una relación de poder lineal, con demandas concretas, que responden a intereses concretos

como mayor libertad y posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones, menor represión religiosa, mayor libertad de acción para las mujeres, mejores expectativas laborales, etc.

Esta estructura de acumulación de poder, a pesar de disponer del control de un recurso vital como es el petróleo, está subordinada a las necesidades de la burguesía mundial, de las elites que compiten por el poder en el ámbito global. La misma esencia del petróleo implica esta subordinación, pues es un recurso al servicio del industrialismo occidental y del proceso de acumulación capitalista global. No sólo la demanda depende de las dinámicas económicas en el centro industrializado, también la oferta está muy ligada a las grandes corporaciones a través de las necesidades tecnológicas y del control de la distribución. El lazo de las elites saudíes con las elites globales se basa pues en una doble dimensión: la subordinación y la alianza de intereses.

Los intereses propios de las elites saudíes se deben subordinar a las necesidades de las elites dominantes del centro del sistema, que no siempre son las mismas con necesidades idénticas, pues la competencia entre ellas también conduce a demandas con matices distintos. Por ejemplo, cuando las elites con mayor poder en el núcleo de la globalización son las que necesitan estabilidad, precios del petróleo controlados, multilateralismo y globalización, las políticas que se exigen a los países productores van en este sentido. Pero cuando las elites dominantes en el centro son las que necesitan conflictividad, precios del petróleo altos o vaivenes para poder especular, unilateralismo y proteccionismo, las exigencias se modifican y nos encontramos en los períodos de mayor conflictividad en Oriente Medio (30).

Así, la función del régimen saudí es facilitar la articulación de la explotación y el control del petróleo con las necesidades de las elites globales. Fuera del sector del petróleo, el capital saudí también es importante para el centro, sobre todo para el sector financiero y para la industria de armamento, con lo que estos dos sectores también crearán lazos directos con las elites saudíes. Y más allá de las relaciones económicas, el control estratégico de Oriente Medio, hasta la invasión de Iraq, también dependía muy estrechamente de las alianzas con Arabia Saudí, por lo que la función de las elites saudíes de servicio al centro del sistema mundial no se limitaba a la propia Arabia, sino que se extendía a toda la región e incluso al mundo árabe y musulmán, como se pudo comprobar con el enfrentamiento con el naserismo y la expansión del Islam más conservador y retrógrado.

Esta articulación con el centro del sistema se basa también en la alianza, pues las elites saudíes se benefician del lazo establecido con las elites globales. Es más, sin esta alianza los Saud no habrían podido consolidar su poder en el seno de la sociedad de Arabia. Por otra parte, la renta generada por la explotación del petróleo también depende de la consolidación de las dinámicas

de poder en el centro y de la permanencia tanto del diseño político del poder como de las relaciones de producción capitalistas. Las necesidades en términos de acumulación de las elites globales y de las elites saudíes coinciden en la defensa de las estructuras políticas y económicas que permiten a estas elites competir con ventaja y controlar los principales recursos de poder. Por esta razón, a pesar de los choques coyunturales que se producen pues todas estas elites también compiten entre sí, hay una coincidencia básica de intereses entre el centro del Centro y el centro de la Periferia (recordemos nuevamente a Galtung) que facilita la colaboración.

Esto explica también la condescendencia de las elites occidentales con los regímenes dictatoriales aliados, pues la efectividad de su función de servicio a los intereses del centro depende de su capacidad de control del poder. Si las elites occidentales estuvieran realmente interesadas en la democratización de la sociedad saudí y de las sociedades árabes, deberían aceptar el coste en términos de independencia de estas sociedades respecto a los intereses del núcleo del sistema. Como no es así, como las elites centrales en su competición por la acumulación de poder no quieren pagar este precio, la realidad es que, a pesar del discurso en favor de la democracia del gobierno norteamericano y de los gobiernos europeos, tanto gobiernos como corporaciones continúan apoyando los regímenes dictatoriales, empezando por el saudí.

La coincidencia de intereses entre las elites del centro y de las elites saudíes se expresa también en la nula voluntad de desarrollo de la economía y de la sociedad. La modernización de la economía, en el sentido de progreso hacia un desarrollo independiente, por una parte debilitaría la utilidad de las elites saudíes al servicio de las elites globales, por lo que la alianza se podría romper y la permanencia del régimen depende en buena parte de esta alianza con el exterior. Por otra parte, el desarrollo económico haría disminuir la dependencia de la renta, con lo que otros sectores ganarían peso específico en la economía saudí, y con ellos la burguesía que controlara estos sectores, lo que redundaría en mayor poder para estas elites burguesas y mayor capacidad de competir con las elites del régimen.

Como vemos, el discurso del gobierno norteamericano expresado en el proyecto del Gran Oriente Medio queda desnudo si lo enfrentamos con los intereses reales de las propias elites norteamericanas y árabes. De hecho, este discurso está copiado de las repetidas declaraciones europeas en el mismo sentido de democratización, desarrollo y resolución de los conflictos de la región. Tanto norteamericanos como europeos no tienen reparos en levantar pantallas propagandísticas tras las cuales esconder los intereses reales que van en la dirección contraria: apoyo a los regímenes dictatoriales, mantener las economías dependientes e impedir su modernización e industrialización, y no solucionar sino estabilizar los conflictos pues éstos también son excusas para consolidar la presencia

occidental y los regímenes aliados, desde el israelí hasta los árabes, pasando evidentemente por los regímenes títere de Iraq y Afganistán.

Petróleo, reforma y democracia

El estado rentista tal y como lo hemos descrito se aleja de cualquier tendencia hacia la democratización. Esto se puede observar desde dos puntos de vista que conducen en la misma dirección. Se puede decir que ante las prácticas del estado rentista los grupos sociales ceden en sus demandas de participación política y de democratización a cambio del patrocinio del estado (31). También se puede decir que el control del estado y la población a través de la renta permiten una enorme acumulación de poder en manos de la elite dirigente. El resultado es la concentración del poder en pocas manos y la dificultad para otras elites y sobre todo para la población de acceder a las decisiones. Esto se refleja en unos sistemas políticos muy centralizados y autoritarios que en las pocas ocasiones en que se ven forzados a establecer sistemas de participación, éstos acostumbra a ser simbólicos y restringidos, como el Majlis al-Shura saudí, en el que empiezan a sentarse un mayor número de profesionales y empresarios, pero que conserva el carácter consultivo a pesar de tener una influencia un poco mayor (32).

La dependencia de la renta por parte de las elites dominantes implica que cuando la renta disminuye, por ejemplo con la bajada del precio del petróleo, las tensiones se extienden a las políticas distributivas y económicas. Los altos niveles de gasto para asegurar las redes clientelares y distributivas, y así consolidar el poder, de los períodos de bonanza crean altas expectativas en la población y en las elites clientelares. En un primer momento, cuando la renta del petróleo disminuye, se acostumbra a mantener el gasto para dar respuesta a estas expectativas endeudando al país, lo que significa endeudar a la población para continuar consolidando el poder con las mismas políticas distributivas y clientelares. Cuando el mecanismo del crédito exterior no es suficiente es necesario aplicar los ajustes que exigen tanto la incapacidad de mantener el gasto como los nuevos credores capitaneados por el Fondo Monetario Internacional. Los ajustes provocan tensiones con la población y con las elites clientelares, a las cuales los regímenes intentan responder con otros recursos de poder como la represión, y en los casos en los que la fuerza de las protestas es demasiado potente, abriendo algunas puertas del poder a otros sectores. Así, se pueden dar casos de negociación entre elites y de entrada en los resortes del poder de elites que hasta aquel momento habían permanecido en el ámbito clientelar, como la apertura del gobierno saudí a sectores de la burguesía y de la autoridad tribal. O incluso se pueden dar casos de procesos de democratización de distinto grado, como los casos de Argelia y

de Kuwait, independientemente de que estos procesos más tarde puedan sufrir involuciones en función de que las elites ligadas a los regímenes recuperen recursos de poder, por ejemplo con la represión y la devastación de la guerra civil en Argelia.

Las dinámicas de privatización se ven impulsadas también por la tendencia a la concentración tanto de las grandes corporaciones como de las actividades *upstream* y *downstream* en el seno de éstas. Mañé anuncia la posibilidad de que esta dinámica llegue también a las petromonarquías de la Península Arábiga, y que países como Arabia Saudí y Kuwait pueden abrir sus yacimientos a las compañías extranjeras (33). Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esto sólo ocurrirá si las elites saudís o kuwaitís creen que pueden acumular más poder privatizando, lo que sólo sucederá si ven amenazas a su posición de control sobre el estado y sobre la renta del petróleo.

La privatización será un signo de debilidad en el ámbito doméstico frente a otros actores, y las elites gobernantes darán este paso si creen que de esta forma restarán capacidad de acumulación de poder en sus contrincantes. Se produciría así un proceso contrario al de los años setenta, cuando la consolidación de los estados y del control de las elites sobre las instituciones estatales permitió la nacionalización de los recursos, con lo que las elites acumularon también el control sobre el petróleo como un recurso de poder.

Vemos pues que, en el caso de los estados rentistas, el recurso a la fuerza y al capital como instrumentos de poder son signos de debilidad y de pérdida de control sobre el estado, por lo que conduce a dos dinámicas contradictorias. Por una parte, la debilidad favorece la aparición de nuevos actores en la competición por el poder y también da pie a que la población se movilice para expresar sus demandas, con lo que estos dos factores ejercen presión hacia la democratización de los regímenes. En el sentido contrario, al fallar la renta del petróleo, las elites gobernantes acuden a otros recursos de poder, principalmente la represión. Los avances democráticos y las conquistas de derechos y libertades chocan con períodos de extrema dureza mucho más sangrienta que en las épocas de estabilidad de los regímenes. Se produce así una tensión permanente que la relación de poder equilibra en el sentido de la libertad o en el de la dictadura. Es por esta razón, por lo que seguramente no podremos hablar de “repúblicas petroleras” en el mundo árabe, y por lo que también probablemente tardaremos en poder hablar de democracias.